

le fija su Carta Orgánica, en tanto resulta en la actualidad argentina un instrumento decisivo para la reactivación económica y el amparo de la producción nacional.

Juan P. Baylac. — Juan C. Passo. — Marcelo J. A. Stubrin. — Eduardo Santín. — María del Carmen Banzas de Moreau. — Mario R. Negri.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Hace un tiempo atrás el jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Economía, Carlos Rodríguez, hizo declaraciones favorables a la privatización del Banco de la Nación Argentina, y motivó que un grupo de diputados de la oposición presentásemos un proyecto en los mismos términos que el que ahora estamos fundamentando.

No obstante en aquellos días se nos decía que era solamente la voz de un tecnócrata y que de ninguna manera era voluntad política del Poder Ejecutivo convertir al Banco de la Nación Argentina en un operador financiero más del sistema bancario.

De ninguna manera nuestra oposición a la privatización está signada por la simple negativa sino que encuentra fundamento en la necesidad que tiene la economía argentina altamente concentrada en contar con un instrumento fundamental para impulsar la actividad económica —especialmente en el sector agropecuario, las PYMES y la industria exportadora— y para promover un desarrollo regional equilibrado.

Si la característica del modelo económico-social es la exclusión y la concentración económica y al propio tiempo la integración regional en el Mercosur promueve regiones marginadas de las decisiones del mercado, es altamente probable que la desaparición del Banco de la Nación del sistema como banca oficial agudice de manera intolerable esta difícil coyuntura.

Pese a que la gestión del Nación haya sido cuestionada en los últimos años, y no obstante que desde la conducción económica se hayan desatendido los objetivos que marca su Carta Orgánica, se trata de una institución que cubre regiones y sectores económicos que no interesan a la banca privada y que, por lo tanto, quedarían a la intemperie, más aún cuando se privatizan los bancos provinciales.

Acaso las autoridades del gobierno no incorporan en el debate la preocupación de los organismos internacionales e incluso de los foros económicos más prestigiosos acerca del nuevo rol del Estado en este fin de siglo con el objeto de equilibrar las consecuencias negativas que procesa en la humanidad la globalización de la economía y la alta concentración de la riqueza, como para no tener en cuenta la necesidad de preservar instituciones que por su rol en la sociedad pueden cumplir acabadamente, fines sociales queridos por una Nación.

No cabe duda entonces de que la venta del Banco de la Nación Argentina agudiza el proceso de concentración de los servicios financieros y privaría al Estado

nacional —y por lo tanto a las administraciones que se sucedan en el futuro— de un instrumento de vital importancia para promover el desarrollo y crecimiento equilibrado.

Creemos necesario entonces que esta Honorable Cámara de Diputados exprese claramente su rechazo a la propuesta de enajenar el Banco Nación y señale la necesidad de que cumpla con eficiencia sus objetivos como impulsor de la reactivación económica y el desarrollo de la producción.

Juan P. Baylac. — Juan C. Passo. — Marcelo J. A. Stubrin. — Eduardo Santín. — María del Carmen Banzas de Moreau. — Mario R. Negri.

—A la Comisión de Finanzas.

⑦ 155-A-98

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º.—Sustitúyese el título II del capítulo 6 del Código Penal "Delitos contra la honestidad" por el de "Delitos contra la libertad sexual".

Art. 2º.—Sustitúyese el artículo 119 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistir.
3. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Art. 3º.—Sustitúyese el artículo 120 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 120: Se impondrá reclusión de tres a seis años, cuando el hecho fuere cometido por un mayor de dieciocho años y la víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciséis y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Art. 4º.—Sustitúyese el artículo 122 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 122: La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, conviviente, ministro de culto, tutor, guardador, o encargado de la educación o del cuidado de aquélla o con el concurso de dos o más personas.

Art. 5º.—Sustitúyese el artículo 123 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 123: Se impondrá reclusión o prisión de ocho a diez años, cuando en el caso del artículo 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior.

Art. 6º.—Sustitúyese el artículo 125 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 125: El que promoviere la corrupción de un menor de dieciocho años mediante actos sexuales perversos, prematuros o excesivos, aunque la víctima consienta en participar en ellos, o en verlos ejecutar, será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años.

La pena será de cuatro a doce años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de dieciséis años.

Art. 7º.—Incorpórase como artículo 125 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 125 bis: La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.
2. Si el hecho fuere ejecutado con propósito de lucro.
3. Cuando se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o coacción.
4. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, conviviente, ministro de culto, tutor, guardador, o encargado de la educación o del cuidado o de la custodia de la víctima.

Art. 8º.—Incorpórase como artículo 124 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 124 bis: Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que vejare sexualmente a una persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122 o si la víctima fuera menor de catorce años, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

Art. 9º.—Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 128: Será reprimido con prisión de tres a ocho años, el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciera circular, si para la producción de las imágenes se hubiera utilizado a menores de dieciocho años.

Art. 10.—Sustitúyese el artículo 131 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 131: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el mayor de dieciocho años que cometiere rapto de una menor de dieciséis años y mayor de catorce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, si el rapto fuere de una menor de catorce años, con o sin su asentimiento.

Art. 11.—Sustitúyese el último párrafo del artículo 72 del Código Penal por el siguiente:

En los casos de este artículo no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, aunque éste fuere menor de edad, o de su tutor, guardador o representantes legales. Se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, madre, tutor o guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, afín en línea directa, hermano, conviviente, ministro de culto, tutor o encargado de la educación o del cuidado de aquél, o cuando existieren intereses contrapuestos entre la víctima y sus representantes o guardadores, y la falta de acusación o denuncia o su ratificación por parte de éstos comprometiese el interés superior del niño.

Art. 12.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvia V. Martínez.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El actual Código Penal necesita ser reformado en varios de sus capítulos, formulados en otros tiempos y desactualizados, no solamente en cuanto a la necesidad de tipificar nuevos delitos, sino fundamentalmente porque una mirada distinta, imprescindible, más justa, que ya alienta en nuestra sociedad, está esperando de nosotros ser expresada en nuestras leyes. En particular, esta mirada diferente es necesaria respecto del efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres y de los niños, expresados en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por ley 23.179, y la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por ley 23.179, ambas con sus Reservas y Declaraciones, y que desde 1994 tienen jerarquía constitucional.

Por otro lado los adultos hemos inventado nuevas formas de explotación de los niños: a la mendicidad y al trabajo clandestino, se agrega el delito organizado instigado o por cuenta de mayores y el tráfico, la prostitución, la pornografía infantiles, como las formas más terribles de su utilización.

Como a lo largo de toda la historia de la humanidad, adultos victimarios y niños víctimas inocentes, adultos queriendo ignorar lo evidente y en muchos casos transformando las víctimas en victimarios, sobre todo si son

adolescentes o muy jóvenes, cuando somos nosotros los adultos los delincuentes, los abusadores, los explotadores, los infames.

Este proyecto quiere contribuir a la erradicación de toda forma de vejación sexual de los niños, comenzando por aquella que se produce en el ámbito intrafamiliar, hasta la violación en muchos casos seguida de muerte, el tráfico, la prostitución organizada y la pornografía infantil.

En 1998 se realizó en el Consejo Nacional del Menor y la Familia una Jornada contra la Explotación Sexual de Niños, con un doble objetivo: homenajear a don Alfredo Palacios y prepararnos para el Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual de Niños, que se realizó en Estocolmo, Suecia, entre el 27 y el 31 de agosto de 1998.

Fue don Alfredo Palacios quien tuvo que bregar por la represión de la corrupción y la prostitución de mujeres y menores, de modo absoluto y proclamándola en todos los idiomas. La ley 9.143 de 1913, sus antecedentes y su debate, son un ejemplo de voluntad política. Era un momento en que hombres de diversos partidos políticos, Palacios desde el socialismo, Agote desde los cívicos porteños, Sáenz Peña desde un conservadurismo republicano, Yrigoyen desde el radicalismo, para nombrar algunas vertientes, coincidían en una preocupación común por las mujeres y los menores de edad, fruto de una creciente coincidencia sobre los problemas sociales. En aquel momento se requería de un gran valor cívico para romper con los esquemas de su tiempo, superar el individualismo y la discriminación en contra de algunos niños.

Tengamos presente lo que ocurría con anterioridad; en el reglamento municipal de prostitución del 5 de enero de 1875 decía que: "Las prostitutas adscritas a las casas de prostitución deberán ser mayores de 18 años, a no ser que se pruebe que antes de esa edad se hayan entregado a la prostitución".

Durante dichas jornadas se propuso la reforma de diversos artículos del Código Penal, en el capítulo de los delitos contra la honestidad, los que integran el presente proyecto de ley.

Recién ahora a un paso de entrar al tercer milenio, la atención de la sociedad se vuelca sobre este terrible flagelo y muestra el valor necesario para intentar erradicarlo.

Así, los participantes del Seminario contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes de las Américas, reunidos en Brasilia, en abril de 1998, en preparación para el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños (Estocolmo, Suecia) en agosto del mismo año y propugnando la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y la aceptación del Protocolo Opcional de la Convención (sobre venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil) denunciaron: "La explotación y el abuso sexual de niños y adolescentes en el ámbito de la familia"; "la explotación sexual de niños y adolescentes realizada a través de la prostitución, la pornografía y del tráfico"; "la expansión de la explotación sexual de niños y adolescentes en redes globalizadas y la industria del sexo, principalmente a través del turismo sexual"; "la morbi-

lidad y mortalidad de niños y adolescentes causada por la explotación sexual y la prostitución"; "la falta de responsabilidad de los gobiernos a nivel local, estatal y federal en la recolección de datos e informaciones sobre la explotación sexual de niños y adolescentes"; "la omisión y la falta de voluntad política de los poderes públicos para punir a los agresores y explotadores sexuales de niños y adolescentes". Entre las recomendaciones de este seminario figuran: "que los gobiernos castiguen a todos los agentes públicos involucrados en la explotación sexual de niños y adolescentes"; "el compromiso por parte de los gobiernos con la promoción y elaboración de proyectos de investigación sobre la explotación sexual en general y específicamente de niños y adolescentes que permitan con base en diagnósticos cuali-cuantitativos del problema, formular políticas de prevención, protección y de atención a este segmento de la sociedad, con la dotación de los recursos necesarios"; "que los medios no utilicen en sus prácticas, la imagen de erotización y sexualización de niños y adolescentes, a través de la pornografía, publicidad en general, películas y videos"; "que los parlamentarios desarrollen acciones conjuntas en la elaboración de leyes y acompañen la realización de acuerdos multilaterales a través de una red articulada por los mismos parlamentarios"; "que los parlamentarios creen, donde no existan, comisiones para investigar, denunciar y dar directivas para erradicar la explotación sexual de niños y adolescentes".

Nuestra propuesta mantiene el criterio sustentado por el cuerpo, que ya ha modificado varios de estos artículos, mediante la sanción del proyecto, ampliado por dictamen de la Comisión de Legislación Penal, que tramitara por expediente 4.091-D.-1994.

Asimismo el proyecto busca la equiparación de la legislación civil y penal en cuanto al tema de las edades, por lo que se aumenta a menor de catorce años la víctima del delito de violación, edad hasta la cual el Código Civil considera "menor impúber" y por lo tanto incapaz absoluto, y mayor de catorce y menor de dieciséis a las víctimas de estupro. Asimismo, se reforman las edades de los restantes delitos sexuales con este criterio.

La edad mínima para contraer matrimonio era de 12 años para las mujeres y de 14 años para los hombres al sancionarse el Código Penal, establecida por la ley 2.393. Por tal motivo, la edad de la víctima de violación (artículo 119, inciso 1º) se establecía en menor de doce años, edad en que se consideraba en ese entonces que coincidía la madurez biológica y la madurez psíquica. Ello era además la edad del Código Civil de Vélez Sarsfield, coincidente con el Derecho Canónico de la época. Con posterioridad el anteproyecto de Biliboni y el proyecto de reforma del Código Civil de 1936 (artículo 339, inciso 4º) establecía las edades en 16 y 18 años respectivamente para las mujeres y los hombres. Con la sanción de la ley 14.394 (artículo 14) se aumenta la edad a 14 años la mujer y a 16 los hombres, concordando con el Códex de 1917 (canon 1.067). El Códex 1983 mantiene estos límites, pero establece que la Conferencia Episcopal de cada nación puede establecer una edad superior (canon 1.083). La legisla-

ción civil mediante la sanción de la ley 23.515, reformó el Código Civil y estableció la edad de 16 años en la mujer y de 18 años para los varones como la edad en que pueden contraer matrimonio. En dicha oportunidad, en el debate parlamentario se estableció que estas edades se fijaban por cuestión de política legislativa (D.S. 1987-367 a 373, Cámara de Senadores de la Nación), ya que no había parámetros ciertos para establecer a qué edad la madurez biológica y la madurez psíquica se equilibraban.

Las modificaciones al Código Penal que se proponen son las siguientes: en primer lugar el proyecto propone la modificación del nombre del título III, reemplazándolo por "Delitos contra la libertad sexual", entendiendo que el concepto de "honestidad" sostenido en el código es arcaico y discriminatorio, sosteniendo que las relaciones sexuales entre las personas deben darse en el marco de la libertad, en el caso de los adultos, y respetando los tiempos de maduración biosocial y emocional de nuestros niños en su evolución hacia la configuración de una sexualidad sana y responsable. Si esa libertad o ese derecho a una adecuada maduración sexual es de algún modo condicionada o avasallada, los delitos previstos en este capítulo se configuran.

Al artículo 119: se aumenta en el inciso 1º la edad de la víctima de menor de doce años a menor de catorce años.

Al artículo 120: se aumenta la edad de la víctima a mayor de catorce años y menor de dieciséis. Asimismo se eliminan los requisitos de honestidad y de mujer, como sujeto pasivo de este delito; quedan fuera del tipo penal los menores de 18 años, con esto lo que se busca evitar es penar las relaciones sexuales que puedan tener los adolescentes, en el marco de sus relaciones sentimentales.

Al artículo 122: se agrega como sujetos activos del delito de violación agravada a los convivientes tutores, guardadores y encargados del cuidado de las víctimas. Asimismo, se modifica el término sacerdote, entre los sujetos activos del delito por ministro de culto.

Al artículo 123: se aumenta el mínimo de la pena.

Al artículo 125: se modifica el presente artículo manteniendo la redacción de la modificación sancionada por este cuerpo en expediente 4.091-D.-1994, (expediente C.D.-171/94), aumentando la edad de la víctima a menor de dieciocho años.

Al artículo 125 bis: se incorpora este artículo, de conformidad con lo sancionado por el cuerpo en el mencionado expediente 4.091-D.-1994, aumentando en el inciso 1º, la edad de la víctima a catorce años. Asimismo, se incluyen en los sujetos activos de este delito a los que se agregan en la reforma propuesta en este mismo proyecto, al artículo 122.

Al artículo 127 se lo mantiene como 124 bis como en la reforma ya sancionada este cuerpo en expediente 4.091-D.-1994, incluyendo en los sujetos pasivos de la forma agravada de este delito a las víctimas menores de catorce años. Asimismo, se aumentó el mínimo de la figura agravada a cuatro años.

Al artículo 128: se pena fuertemente la utilización para la producción de las imágenes de las publicaciones y reproducciones obscenas a menores de dieciocho años.

Al artículo 131: se pena al mayor de 18 años, siguiendo el mismo criterio del artículo 120, se aumenta la edad de los sujetos pasivos del delito de rapto impropio, a menor de dieciséis y mayor de catorce a la figura atenuada y a menor de catorce años en la figura agravada. Asimismo se aumenta el mínimo de la pena para este delito a cuatro años.

Se modifica el último párrafo del artículo 72, habilitando al menor, y a terceros, a promover la acción pública cuando el interés superior del niño así lo aconseje, en concordancia con lo previsto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Nuestra voluntad es lograr la modificación penal, pero la misma no alcanzará si no es la sociedad toda la que asume la protección integral de los niños, no sólo desde lo penal sino en todos los aspectos.

La Convención de los Derechos del Niño con su rango constitucional, no es sino letra muerta si no somos los adultos responsables de todos y cada uno de nuestros niños. Es tiempo de asumir las palabras de François Dolto en su obra *La causa de los niños*: "El niño no tiene todos los derechos, pero no tiene más que derechos. Los padres no tienen sobre su persona ningún derecho, sólo tienen deberes".

Señor presidente, por los motivos invocados solicitamos la aprobación por parte de este honorable cuerpo del presente proyecto de ley.

Silvia V. Martínez.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

78

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — *Persecución penal del ultraje sexual*. En los casos previstos en el artículo 72 inciso 1º del Código Penal la persona ofendida podrá, incluso con la participación de alguna asociación civil sin fines de lucro, dedicada a la atención de esta problemática (artículo 4º):

- a) Tomar a su cargo exclusivo la acusación, en cuyo caso será de aplicación el régimen de la acción privada (artículo 73 del Código Penal);
- b) Instar el ejercicio de la acción pública (artículo 72 del Código Penal). La instancia será retractable. La retractación expresada libremente y en condiciones de igualdad extingue la acción penal respecto de todos los participantes. El tribunal deberá comprobar la concurrencia de tales extremos antes de aprobar la retractación.

No regirá lo dispuesto por este artículo en las hipótesis del artículo 72 *in fine*, debiendo procederse de oficio.